

La universidad argentina en la coyuntura del Gran Acuerdo Nacional (1971-1973)

Mariana Mendonça

Instituto de Historia Argentina y Americana

“Dr. Emilio Ravignani”, UBA – CONICET

mmendonca85@gmail.com

Resumen

Durante el período de la autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973), la universidad estuvo en el centro de la escena. La masificación de la matrícula iniciada a mediados de la década del cincuenta, junto con el proceso de radicalización política de los jóvenes universitarios de aquellos años hicieron que la política de los tres presidentes de facto impulsaran distintas medidas para solucionar el llamado “problema universitario”. En esta ponencia nos interesa poner el foco en el tercer y último mandato a cargo del general Lanusse. Este período marcará un giro en la política nacional, y consecuentemente, en la vida universitaria. En este sentido, nos proponemos avanzar en el análisis de las políticas implementadas en las casas de estudio, haciendo especial hincapié en el diálogo que el nuevo Jefe de Estado intenta establecer con la juventud.

Introducción

En 1969 la política de Onganía parecía tambalear.¹El movimiento estudiantil y el movimiento obrero en actividad coincidieron en una acción política que constituiría el principio del fin para el gobierno militar. El descontento social era manifiesto y develaba el deterioro y fracaso de la política económica de KriegerVasena y, consecuentemente, el de la dictadura. Los reclamos corporativistas de ambos grupos se desdibujaron lentamente y se forjaron en una lucha más radical, que comenzó con un fuerte reclamo contra el gobierno de facto considerado ilegal e ilegítimo. La proscripción de los debates universitarios y de la política estudiantil, sólo logró adormecer a la comunidad académica por un período breve de tiempo hasta que en 1969, la política autoritaria tuvo un efecto contrario al esperado y terminó por volcar a los estudiantes hacia los problemas sociales y políticos por fuera del ámbito académico. Esto se vio reforzado por el vínculo establecido entre los obreros y los estudiantes, lo que terminó por relacionarlos a los partidos políticos prohibidos por el régimen

¹ El general Juan Carlos Onganía había sido designado presidente de facto por la Junta Militar tras el golpe de Estado de junio de 1966.

militar Así, comenzó a tomar impulso la convicción de que sólo mediante la fuerza y la violencia sería posible reponer la legitimidad popular (Pérez Lindo, 1985, pág. 152).

El *Cordobazo* de mayo de 1969 fue la culminación de un proceso que se venía gestando desde principios de la década y que marcó un punto de inflexión en la política del régimen de facto (Brennan & Gordillo, 2008, págs. 101-05). Estos hechos forzaron un cambio de gabinete. Los nombramientos intentarían demostrar un nuevo rumbo en el gobierno, iniciando así el “tiempo social”.² De este modo, en la cartera de Economía y Trabajo sería designado el doctor José María Dagnino Pastore, economista egresado de Harvard, hasta entonces secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE).³ El Ministerio de Relaciones Exteriores estaría a cargo del doctor Juan B. Martín, quien se había desempeñado como embajador en Japón y era especialista en exportación agrícola. Por su parte, la cartera de Bienestar Social quedaría a cargo del médico Carlos Consigli, quien se había desempeñado como Ministro de Salud Pública en Córdoba. Como Ministro de Defensa se nombró al doctor José R. Cáceres Monié y en la cartera de Interior, se nombró a Francisco Imaz, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta elección, afirma Potash(1994), traería conflictos entre Lanusse y Onganía en un muy corto plazo. Explica que para el primero de ellos, la violencia reciente obligaba a comenzar a planificar el futuro político. Era necesario, entonces, abandonar la inmovilidad política y la retórica participacionista, para lo cual hacía falta un Ministro del Interior que se caracterizara por tener habilidad y contactos para entablar un diálogo con los grupos políticos civiles. Onganía, en cambio, no creía que la situación ameritara un cambio tan drástico, y consecuentemente seguiría con el plan de reorganización económica y social en etapas, ignorando a los partidos políticos y postergando cualquier apertura política (págs. 96-7).

En lo que respecta al área educativa, se nombró como nuevo Secretario de Educación a Dardo Pérez Guilhou, hasta entonces rector de la Universidad Nacional de Cuyo en donde había demostrado una gran capacidad de diálogo con estudiantes y profesores (Potash, 1994, págs. 95-6). Asimismo, Emilio Mignone, quien había estado desempeñando un cargo en el

² Onganía había establecido tres tiempos a cumplirse durante el proceso “revolucionario” que comenzó en junio de 1966: un tiempo económico, un tiempo social y luego un tiempo político. Recién cumplido los primeros dos tiempos se podría dar inicio al tercero.

³Mediante el decreto N° 7.290, se creó en el año 1961 el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). El organismo, dependiente de la presidencia, tenía como finalidad la programación y planificación de políticas para el desarrollo. Tres años después se creó un sector dedicado exclusivamente al análisis educativo (De Luca & Alvarez Prieto, 2013). El objetivo del equipo técnico consistía en elaborar un diagnóstico de la situación educativa en el país y desarrollar una planificación a seguir en el mediano y largo plazo. A pesar de los vaivenes políticos de la época y los cambios internos en las estructuras gubernamentales, el Sector Educación del CONADE se mantuvo tras el golpe de Estado de 1966 y los resultados del trabajo elaborado fueron expuestos durante el gobierno de Onganía.

Sector Educación del CONADE, fue nombrado subsecretario técnico de dicha cartera. Los cambios apuntaban a desarrollar una política menos represiva hacia las universidades. Al igual que Guilhou, el nuevo subsecretario era considerado un dialoguista. La nueva agenda gubernamental dentro de la cartera educativa, estuvo focalizada en la estabilización y la institucionalización con el fin de abrir y establecer un diálogo con rectores y decanos de las casas de altos estudios. Pérez Guilhou pretendía, así, darles mayor autonomía local a los funcionarios universitarios, ya que consideraba importante que cada uno adoptara las medidas que creía necesarias para hacer frente a la crisis (Millán, 2013, pág. 165).

Una vez realizado el cambio en la cartera de Educación, y a dos meses de los acontecimientos de mayo, el general Juan Carlos Onganía reconocía públicamente que los intentos en materia educativa por reencauzar y normalizar las casas de altos estudios habían fracasado. Sin embargo, insistía en que los acontecimientos ocurridos en las universidades eran el resultado de acciones de grupos extremistas que confundían a la población. Consecuentemente, seguía siendo primordial la necesidad de extirpar definitivamente del seno de la universidad “a quienes utilizan el derecho de estudiar -privilegio del que no gozan otros- para crear condiciones de desorden y de destrucción”. Asimismo, llamaba a la juventud universitaria a “reflexionar serenamente sobre los últimos hechos ocurridos” y afirmaba que “ni con la violencia que sólo sabe destruir ni con la apatía que es falta de compromiso ni con el silencio de los que callan ni bajo la presión de los que gritan, podemos construir el país moderno y justo que todos queremos” (Onganía, 1969).

El presidente de facto sostenía que el gobierno había puesto al servicio de la educación universitaria todos los recursos del Estado, con un único fin: “que la universidad cuente con todos los medios necesarios para cumplir su proceso de transformación y modernización”. Sin embargo, para ello era necesario que “los claustros [tuvieran] la paz y la serenidad necesaria para el estudio y la investigación” y que sus profesores, egresados y estudiantes “[encausaran] un diálogo franco y con mucho respeto” para debatir los temas que generan sus inquietudes. En este sentido, afirmó que el gobierno apuntaba a crear una universidad “que sirva al país que la sostiene y sea nervio y motor de su crecimiento humanístico, técnico y científico”. Asimismo, expresaba que “la labor desarrollada en ese campo, por la nación y las provincias, testimonian nuestro afán de reconstruir para todos los rincones del país la educación nacional”. Por último, y en relación a la política a seguir en materia educativa, el presidente de facto señalaba que su gobierno era “consciente de la imperiosa necesidad de adecuar la enseñanza a los requerimientos del futuro”. En este sentido, y en el marco de la integración territorial que llevaba adelante su gobierno, declaró que se crearían más escuelas,

universidades y centros de investigación, sin importar el costo que ello implicara (Onganía, 1969).

Todos estos cambios parecían indicar, finalmente, un nuevo ciclo en materia educativa. De la mano de la política de Dardo Pérez Guihlou, Mignone había ingresado al gabinete con el objetivo de implementar cambios estructurales en el sistema educativo argentino, tales como la descentralización de la educación, cátedras a tiempo completo en el secundario, nuevas carreras universitarias orientadas a las necesidades regionales y libertad e independencia a la investigación científica (del Carril, 2011, pág. 157). Sin embargo, y pese a la fuerte retórica por parte del gobierno nacional, tardarían en plasmarse dentro de las casas de estudio.

La creación de nuevas universidades como política de Estado

Pese a haberlo adelantado en su discurso, durante los meses que siguieron no se evaluó la posibilidad de crear nuevas universidades nacionales de inmediato. Los flamantes miembros de la cartera de Educación no acordaban con la idea de crear nuevas universidades nacionales, como tampoco se manifestaron a favor los técnicos del Sector Educación Desarrollo (CONADE), ya que consideraban que era un gasto sin beneficios en el corto o mediano plazo.⁴ Sin embargo, la posibilidad de crear nuevas universidades tomó estado público⁵ y las comunidades locales de diferentes puntos del país comenzaron a movilizarse en pos de la materialización de dicha propuesta. Consecuentemente, antes de ser destituido, Onganía aceptó la posibilidad de evaluar seriamente esta posibilidad y materializarla en la ciudad de Río Cuarto, siempre y cuando se elevaran los informes correspondientes que justificaran semejante inversión. Sin embargo, al poco tiempo, el presidente de facto fue destituido y la materialización de esta propuesta quedó, otra vez, sin respaldo oficial.

Con la asunción de Levingston se realizó un nuevo recambio en el gabinete. En la cartera de Educación, el doctor Dardo Pérez Guilhóu fue desplazado y se nombró en su lugar al Ingeniero José Luis Cantini. El cambio de ministro, sin embargo, no modificó la línea de trabajo de la cartera de educación. Por el contrario, ésta se profundizó, lo que se evidencia en

⁴ Las discusiones en torno a la posibilidad de crear nuevas casas de estudio estuvieron a la orden del día desde 1968 hasta que finalmente se materializó dicha política en 1971. En estas discusiones no sólo participó el CONADE y el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN), sino también académicos como Alberto Taquini (h), decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

⁵ Taquini (h), decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA e hijo del presidente del Consejo de Ciencia y Técnica en aquel período, expuso públicamente sus ideas por primera vez en una entrevista publicada por una revista de tirada nacional. Allí, además de exponer los principales problemas que encontraba en el sistema de educación superior, adelantó la idea de crear nuevas universidades en el interior del país.

la continuidad otorgada al equipo técnico encabezado por Emilio F. Mignone (Suasnabar, 2004, pág. 158), quien ahora ocuparía el cargo de subsecretario de Cultura y Educación. Esto implicaba que la propuesta de Taquini seguiría sin obtener una recepción positiva. Si bien Mignone reconocía la existencia de un plan ministerial de desarrollo universitario nacional (Rovelli, 2008, pág. 75), desestimaba la propuesta del doctor Taquini (h), al referirse a la misma como un programa de creación de universidades satélites, el cual –aseveraba- no formaba parte del plan de su ministerio. Asimismo, en una entrevista personal, José Luis Cantini manifestó que la creación de nuevas universidades no formaba parte de la agenda de discusión durante el tiempo en que fue ministro. El único proyecto en el que se había avanzado durante el período de su gestión, era el de la creación de la Universidad Nacional del sur cordobés, desarrollado por fuera del ámbito estatal.

Sin embargo, en una audiencia con representantes de la Comisión Pro Universidad de Río Cuarto, el presidente de facto había manifestado su preocupación por el problema obrero de la ciudad de Córdoba y su particular interés en la descentralización de esa universidad nacional, ya que evitaría la aglomeración de los estudiantes, hecho que terminaba muchas veces afectando la tranquilidad pública. Es por ello que creía necesario incluir dicho proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad que estaba elaborando el CONADE (Martorelli, 1991, pág. 152).

El presidente me manifestó categóricamente que apoyaba la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto por la necesidad que existía de ese centro educacional en la región sur de la provincia de Córdoba, y que además le interesaba como medida política (Gobernador de la provincia de Córdoba, Bernardo Bas citado en Martorelli, 1991, pág. 140).

Con ello, el “plan Taquini”, bajo el gobierno de Levingston, comenzó a ser visto como un instrumento político, destinado no sólo a cumplir con la descentralización universitaria y el desarrollo regional, sino también en vistas de suplir los requerimientos de la seguridad nacional. En este sentido, el general Juan Enrique Guglielmelli, titular del CONADE, manifestó que la universidad de la ciudad de Río Cuarto era uno de los asuntos prioritarios, por lo que suponía que la misma iniciaría sus funciones en el año 1971 (Martorelli, 1991, pág. 137). Consecuentemente, y antes de que finalizara su mandato, Levingston, logró incluir el proyecto de nuevas universidades nacionales en el plan nacional elaborado por el CONADE para el quinquenio 1971-1975.

Con la asunción de Lanusse el tema volvió a estar en el centro de la escena. Desde antes de llegar a la presidencia, Lanusse había manifestado su interés por crear nuevas universidades nacionales. En el acto del general Onganía en la ciudad de Río Cuarto, en el que la población le reclamó la sanción de la ley para la creación de la universidad nacional en dicha localidad, fue él, entonces Comandante en Jefe, quien le sugirió al presidente que les diera una respuesta afirmativa. De acuerdo al testimonio de Martorelli (1991), Lanusse le habría dicho a Onganía “digales que sí, digales que sí”.

Su propuesta coincidía con los diagnósticos desarrollistas elaborados en la década de 1960, en donde se afirmaba que la creación de nuevas universidades era capaz de potenciar el desarrollo económico. En la Argentina, bajo la consigna de “nuevas universidades para un nuevo país”, Taquini señalaba que la descentralización del sistema universitario contribuiría al desarrollo de las provincias, ya que las nuevas carreras conformarían un nuevo factor de crecimiento de las economías regionales. En este sentido, cabe señalar los ejes dedicados a la educación superior que fueron expuestos en un conjunto de *Políticas Nacionales* (Boletín Oficial 29/07/70), elaboradas por el CONADE, el CONASE y el CONACYT, y aprobadas por la Junta de Comandantes en Jefe, integrada en su momento por el general Lanusse, el almirante Gnani y el brigadier Rey. En el mismo pretenden “convertir las universidades en centros vivos y dinámicos de investigación y estudio, creadores y transmisores de cultura (...); participación activa de la universidad en la problemática del desarrollo y la seguridad; vinculación estrecha de la universidad con el resto del sistema educativo; [y efectuar un] redimensionamiento de la universidad de acuerdo con las necesidades del país y exigencias técnicas de eficiencia” (art. 31º, 32º y 33º).

Una vez que llegó a insertarse dentro de la agenda política del gobierno, el proceso adquirió un acelerado ritmo junto con el aumento de las presiones provinciales por crear universidades nacionales en todo el país, y obligó al gobierno nacional a exigir “estudios de factibilidad” que justificaran la solicitud. Consecuentemente, desde el Ministerio de Educación, a cargo del doctor Gustavo Malek desde el mes de mayo, se elaboraron, junto a un equipo de técnicos, las “Pautas de creación para Universidades Nacionales”. Estas respondían a la demanda compulsiva de nuevos establecimientos y pretendían “ordenar y sugerir procedimientos para estructurar y presentar proyectos de creación de instituciones universitarias” (Ministerio de Cultura y Educación, 1972).

El plan de Taquini (h), aunque modificado, llegó a instalarse en la agenda del gobierno militar. El diagnóstico sobre la situación universitaria en el país era claro, y se debía concretar una solución en el mediano y largo plazo. Sin embargo, en principio, la posibilidad de crear

nuevas universidades nacionales no era una opción. Por el contrario, sí aparecieron algunas alternativas para modificar cualitativamente el sistema de educación superior, proponiendo, al menos, algunos cambios académicos y administrativos, tales como la reorganización de las Facultades en departamentos, la implementación de carreras cortas, y la dedicación exclusiva de profesores, entre otros. Todo ello, claro está, aprovechando los primeros años de la política represiva del gobierno de Onganía e intentando mantener el autoritarismo que caracterizó este período.

Tal como hemos podido observar, el proceso de creación de nuevas universidades fue largo. Lo diagnóstico y la propuesta de Taquini surgieron en 1968, sin embargo será recién en la década de 1970 que comenzará a proyectarse la materialización de dicho plan. Al ser implementado tras los acontecimientos de Córdoba de 1969 y 1971, esta política ha sido analizada por distintos autores como una maniobra política para descentralizar al movimiento estudiantil. En este sentido, Cano (1985, pág. 15) afirma que la creación de nuevas universidades nacionales fue parte de una medida política para descongestionar las universidades tradicionales. Asimismo, Buchbinder (2005, pág. 199) precisa que la diversificación del sistema universitario constituyó uno de los principales instrumentos del régimen para procurar frenar los efectos políticos de la movilización estudiantil. Por su parte, De Amézola (2000, pág. 199) señala que la multiplicación de universidades nacionales encubría, mediante argumentos técnicos, el intento por disminuir las grandes concentraciones estudiantiles. En la misma línea de análisis, Rovelli (2008, pág. 116) explica que la creación de nuevas universidades, con el pretexto de redimensionar las universidades tradicionales, ocultaba la voluntad del gobierno de contrarrestar el activismo estudiantil en dichas instituciones. De manera general, estas apreciaciones se enmarcan en el análisis de Pérez Lindo (1985, pág. 155), quien sugiere que la política universitaria de este período tuvo como objetivo implícito desconcentrar las grandes masas estudiantiles de las principales universidades.

Sin embargo, en un análisis más detallado, el mismo autor afirma que dicho objetivo sería inconsistente en el corto y/o mediano plazo, ya que crear nuevas universidades para descentralizar las grandes casas de estudios llevaría 10 o 15 años como mínimo. Esto nos obliga a pensar, entonces, en otras variables que permitan interpretar el fenómeno en su totalidad. A continuación analizaremos el contexto político en el que finalmente se lleva a cabo la materialización del proyecto de creación de nuevas universidades para poder desentrañar las causas de su implementación.

Lanusse y el tiempo político

Instalado en el poder, Lanusse abocó su gestión a encontrar una salida política que pudiera encauzar la crisis y las grandes movilizaciones que expresaban el descontento general. Como primera medida restableció la actividad partidaria y anunció elecciones generales en un corto plazo y sin proscripciones. Ese mismo día, el Ministro del Interior anunciaba que se juntaría con los representantes de los partidos políticos. En paralelo, enviaría un plan a la Junta y comenzaría a conformarse una Comisión Coordinadora del Plan Político que tendría como objetivo proponer reformas en la Constitución y redactar la Ley Electoral y el Estatuto de los partidos (De Amézola, 2000, pág. 98). Era la primera vez desde 1955 que se incluiría al peronismo en las elecciones. Había llegado el momento para que las FF. AA. comenzaran su retirada y se llevara a cabo el pasaje de un gobierno de facto a uno constitucional. El encargado de formular la estrategia de transición fue Arturo Mor Roig, perteneciente al radicalismo. Con ello, se pretendía mostrar el “juego limpio” que proponía el nuevo jefe de Estado. Las elecciones se llevarían a cabo previo acuerdo de todas las fuerzas políticas, estableciendo un conjunto de principios y metas para el futuro gobierno y un candidato presidencial común (De Riz, 2000, pág. 93). Entre las “reglas” que planteaba el Gran Acuerdo Nacional (GAN), se destacaba el repudio a la guerrilla, condición impuesta por las FF. AA. Para avanzar hacia la apertura política. Era de suma importancia que todos los políticos se pronunciaran abiertamente en contra, especialmente Perón, con quien amplios sectores de la juventud se habían identificado fervientemente desde su exilio en Madrid. A tal punto que Lanusse abrió un canal de comunicación personal con el General y le propuso la restitución del cuerpo de Evita, la devolución de su cargo militar y el cierre de las causas judiciales en su contra (Novaro, 2010, pág. 114). Sin embargo, la negativa a negociar era contundente. Perón no sólo no desautorizó a los grupos guerrilleros, sino que encontró en ellos un medio de presión decisivo contra el régimen militar (Rouquié, 1983, pág. 293).

Las agitaciones contra el régimen y la falta de cohesión interna del ejército complicaron el proceso de transición propuesto por Lanusse (Rouquié, 1983, pág. 290). El peronismo había ampliado sus bases sociales: a los estratos populares y los sindicatos se les habían sumado los sectores medios, empresarios y los jóvenes universitarios. El fracaso de la “Revolución Argentina” y sus políticas antipopulares habían posicionado a Perón en la escena política, y en el marco de la crisis militar en ciernes, decidió no pronunciarse a favor del GAN que auspiciaba Lanusse. Por el contrario, el ex presidente se ofrecía como la alternativa para salvar al país del levantamiento social, a manera de “árbitro” entre los partidos políticos y los militares para restaurar y normalizar el orden constitucional (Rouquié, 1983, pág. 290).

Mientras tanto, la crisis en el interior de la cúpula militar se agravaba. El GAN, podría haber permitido el retorno de los militares a los cuarteles sin la traición absoluta de la “Revolución Argentina”. Sin embargo, la negativa de Perón y el carácter ambiguo que Lanusse presentaba en sus discursos generaban malestar entre los militares antiperonistas que se posicionaban a favor de los lineamientos de Onganía y Levingston de seguir profundizando el proceso “revolucionario”. Las tensiones salieron a la luz en el mes de mayo de 1972, cuando un grupo de oficiales nacionalistas intentó llevar a cabo un complot pronunciándose “contra el regreso del pasado”. A pesar de que el mismo fue abortado, los rumores del levantamiento debilitaron la posición de Lanusse en la negociación con los representantes de La Hora del Pueblo, lo que llevó a fijar las elecciones omitiendo el plan inicial que proponía reconocer los partidos conforme al estatuto en preparación y luego proclamar la fecha de los comicios. Consecuentemente, se fijaron las elecciones para el 25 de marzo de 1973.

Un nuevo intento por sofocar el tiempo político abierto por Lanusse se llevó a cabo en octubre, cuando una rebelión de los Regimiento de Caballería Blindada se desató en la provincia de Buenos Aires. Lanusse manifestó su repudio absoluto y calificó el levantamiento como “fascista”, pero no logró convencer a la opinión pública cuya desconfianza aumentaba (De Riz, 2000, págs. 98-9).

Paralelamente, la situación económica empeoraba y la inflación había llegado al 34.7% anual, triplicando los valores del año anterior. Al asumir, Lanusse introdujo cambios en la economía, recuperando los lineamientos liberales ortodoxos del período de KriegerVasena. Esto generó un retroceso de la actividad económica, un alza de los precios y un aumento considerable del desempleo (Rouquié, 1983, pág. 290).

El proceso inflacionario no hacía más que generar el debilitamiento del Estado y aumentar el descontento popular en relación al régimen. Paralelamente, los movimientos revolucionarios fortalecían sus bases sociales y encontraban apoyo de los sectores medios y los grupos universitarios. A su vez, el apoyo de Perón desde el exterior profundizaba las acciones que se habían gestado durante los cinco años de proscripción política. Consecuentemente, el control público y legal de la violencia estatal se fue extinguiendo y la represión ilegal volvía a ser parte de la escena política. La Masacre de Trelew en agosto de 1972 fue la evidencia más trágica de dicho proceso (Novaro, 2010, pág. 112).

La radicalización política

Los asesinatos de Augusto T. Vandor y del general Aramburu no fueron actos aislados, sino el inicio de una serie de acontecimientos que marcarían el accionar de los

grupos revolucionarios del período. En este marco, el *Cordobazo* y las sucesivas puebladas que le siguieron en diferentes puntos del país, formaron parte del clima de “contestación” del período, que reclamaba mayor participación, más libertad, más justicia social y política. Las movilizaciones populares se transformaron en acciones políticas de masas en oposición al régimen militar, dando lugar a lo que luego se conocería como la “nueva izquierda argentina” (Torti, 2000, pág. 147).

Diferentes grupos sociales formaban parte de este proceso que había surgido de manera espontánea y sin direcciones políticas. Las reivindicaciones de los trabajadores pronto se convirtieron en objetivos “clasistas”. La tendencia llegó incluso a abarcar fracciones de la Iglesia, que dieron origen al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo en 1968. En este movimiento, que abarcó tanto a religiosos como a laicos, las organizaciones solidarias y las acciones de protesta abandonaron el lenguaje evangélico y tomaron un carácter específicamente político. La “violencia desde abajo” se justificaba por la “violencia de arriba” materializada en la desigualdad social. La solidaridad con las clases populares identificaba su política con el peronismo. De este modo, facilitaron la incorporación a la política de jóvenes que habían sido educados en colegios religiosos y cercanos al nacionalismo católico (Romero L. A., 2012, pág. 208).

La universidad, en crisis permanente desde el golpe de 1966, había subordinado toda su actividad a la práctica política. Con una orientación claramente opuesta al régimen, y estimulados a su vez por la revolución cubana, la difusión de las ideas marxistas y las movilizaciones estudiantiles de diferentes partes del mundo, los estudiantes traspasaron las barreras de la “isla democrática” construida desde 1955 y formaron parte del movimiento contestatario propio del clima de la época.

Los sectores medios, vinculados a la izquierda, a la iglesia o al nacionalismo, comenzaban a identificarse cada vez más con el peronismo. Por su parte, los sectores jóvenes sin experiencias políticas anteriores encontraban en este movimiento un espacio de representación y de contestación social. A su vez, dentro del peronismo comenzaban a surgir fracciones radicalizadas, lo que llevó a una reinterpretación de las banderas clásicas antiimperialistas y de justicia social. Así, Perón aparecía como líder tercermundista partidario de un “socialismo nacional”, con lo cual ampliaba sus bases sociales al incluir contenidos y reivindicaciones de la izquierda, el nacionalismo y del catolicismo (Torti, 2000, pág. 148).

En este escenario comenzaba a consolidarse la idea de que la violencia política era un instrumento necesario. En el interior del peronismo se fortalecían organizaciones revolucionarias como Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y las Fuerzas

Armadas Revolucionarias (FAR); por fuera de él, destacaba el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Así, la “nueva izquierda” de la Argentina reclamaba la violencia como “momento” inevitable de la vida política (Tortti, 2000, pág. 148). Las primeras prácticas guerrilleras fueron descubiertas en 1968 de la mano de las Fuerzas Armadas Peronistas en Taco Ralo. Dos años después, existían más de quince grupos armados, de los cuales solo cinco tuvieron alcance nacional (Pozzi & Schneider, 2000). Hacia finales de 1971 las prácticas guerrilleras tenían un alto porcentaje de aprobación por parte de la población: un 45,5% en Buenos Aires, 51% en Rosario y 53% en Córdoba (De Riz, 2000, pág. 102).

Las medidas que adoptó Lanusse para hacer frente a las acciones de las organizaciones armadas no hicieron más que aumentar el apoyo de la población hacia estos movimientos, especialmente durante el incremento de las acciones represivas realizadas durante 1971. En el mes de mayo aumentaron las penas por delitos comunes y se creó la Cámara Federal en lo Penal que tenía competencia para juzgar delitos de “naturaleza subversiva” (Ley 19.053). El 16 de junio se dictó una ley que facultaba al Poder Ejecutivo a emplear a las Fuerzas Armadas para “prevenir” y combatir a la subversión durante la vigencia del Estado de Sitio (Ley 19.081). A su vez, el aumento de la represión por parte del gobierno militar no hizo sino potenciar las acciones guerrilleras (Novaro, 2010, pág. 112). De este modo, el ejército aparecía como impotente para solucionar no sólo los problemas económicos y políticos del país, sino que se manifestaba incapaz de demostrar competencia en su propio ámbito: el militar.

El clima de violencia generalizado y la ausencia de una salida en el marco del régimen de facto aumentaron la inquietud de amplios sectores sociales que reclamaban tranquilidad y normalización. Esto llevó a que un número cada vez mayor de argentinos encontrara como única solución la retirada definitiva de los militares. Consecuentemente, la violencia pasaría a ser la pieza clave del enfrentamiento entre Lanusse y Perón en el marco de la apertura política y el llamado a elecciones (Novaro, 2010, pág. 112).

Apertura democrática y nuevas universidades nacionales

Desde principios de la década de 1960, tal como señalamos, las organizaciones políticas atravesaron un proceso de radicalización muy importante. En el marco de la revolución cubana, las movilizaciones, levantamientos y puebladas registradas a finales de la década dejaban entrever la posibilidad real de una revolución por medio de la “toma del poder”. De allí la fuerza que adquieren las organizaciones guerrilleras identificadas con

diferentes ideologías de base. Sin embargo, el carácter heterogéneo que registró el descontento popular puso en evidencia la crisis de representatividad que atravesaban los partidos tradicionales, incluyendo la izquierda. La ausencia de una propuesta política clara y la imposibilidad de construir una fuerza política unificada terminaron por derrotar cualquier intento por hegemonizar la lucha popular. Todos los grupos, armados o no, que intentaron desarrollarse por fuera del imaginario populista, quedaron aislados cuando el peronismo lanzó la consigna “luce y vuelve” y aglutinó a todas las organizaciones que se identificaban políticamente con esta ideología. Consecuentemente, la base social del peronismo se amplió, lo que luego facilitaría el retorno de su representante al gobierno mediante elecciones (Torti, 2000, págs. 149-59).

En este contexto, el GAN tenía como objetivo abrir canales que posibilitaran controlar la creciente movilización popular y sofocar a la guerrilla cada vez más activa. En este sentido, de acuerdo a De Amézola(2000), “el plan de Lanusse se fundamentaba en la necesidad de asumir la realidad de la sociedad argentina y desmontar su conflictividad. «Distender», «desconcentrar» y «aislar» serían los objetivos a los que debían confluir los ministros del gabinete en acción coordinada” (pág. 95).

El objetivo final era la apertura política y el llamado a elecciones. Sin embargo, antes que ello, y como condición para el funcionamiento de las instituciones, Lanusse abriría un diálogo con todos los sectores sociales. Iniciado con el nombramiento de Arturo Mor Roig como Ministro del Interior,⁶le seguiría una activa política de asistencialismo dirigida por Francisco Manrique, a cargo del Ministerio de Bienestar Social. En vistas de “solucionar o atender los problemas del hombre común”, el nuevo Ministro se abocó a recorrer el interior del país para escuchar los reclamos de las provincias. Los objetivos se orientaban a brindar soluciones en materia de seguridad social, atención hospitalaria y déficit habitacional. Asimismo, proponían crear un nuevo sistema para amas de casas y nuevos regímenes para docentes y trabajadores rurales (De Amézola, 2000, pág. 99).

La política laboral, por su parte, iba a estar orientada a fortalecer las relaciones con la central obrera. Como nuevo secretario de trabajo se nombró a Rubens San Sebastián, quien declaró que iba a “trabajar alejado de motivaciones de tipo político y en favor del movimiento

⁶Potash(1994, pág. 243) da cuenta que, a pesar del hecho de que pertenecía a la Unión Cívica Radical del Pueblo (el mismo partido que fue derrocado por el golpe de Estado de junio de 1966), un estudio del Estado Mayor General del Ejército había recomendado su nombramiento, destacando sus habilidades políticas, su integridad personal y su clara visión respecto a la necesidad de una reconciliación política. En un principio dicho nombramiento fue negado por parte del líder de la UCRP, Ricardo Balbín, pero pronto se resolvió, al obtener el apoyo unánime de los integrantes de la Hora del Pueblo, quienes afirmaban que era el mejor modo de garantizar la apertura política.

obrero”. En este sentido, destrabó las restricciones a los convenios colectivos que establecían topes, permitiendo que los gremios reclamaran aumentos de hasta un 30%. Asimismo, se levantaron las intervenciones en algunos gremios y se llamó a elecciones en otros. De este modo, la política de San Sebastián estuvo orientada a “distender” y “desconcentrar” los conflictos sindicales (De Amézola, 2000, pág. 100).

En lo que refiere a la educación, el gobierno debía hacer frente a una problemática que no había cesado e incluso se había profundizado durante los años de la “Revolución Argentina”. Al poco tiempo de dejar el gobierno, y tal como ya hemos mencionado, Onganía reconoció públicamente la mala gestión en las casas de altos estudios. Al momento de la asunción de Lanusse, la situación se había agravado. Por una parte, los conflictos se habían extendido hacia afuera del ámbito universitario. Como consecuencia del proyecto de reforma educativa en las escuelas primarias, secundarias y técnicas, impulsado por el Ministro José Luis Cantini⁷, se había llevado a cabo una huelga general el 31 de marzo. Específicamente en el ámbito universitario, aún no se había logrado ejecutar una política coherente (De Amézola, 2000, pág. 101).

En este marco, Lanusse dio comienzo a lo que luego conformaría el segundo proceso de transformación del sistema de educación superior en el país. En el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad anunciado para el quinquenio 1971 -1975 se proponía la creación de 5 nuevas universidades en diferentes puntos del país. El nuevo presidente de facto dio rienda suelta al cumplimiento de este apartado y anunció la creación de nuevas universidades nacionales.

Con esta nueva medida, sin embargo, no se tuvieron en cuenta otras fuerzas sociales, que pronto intervinieron en el proceso. Las llamadas “fuerzas vivas” fueron un factor de suma importancia para llevar a cabo la creación de las universidades proyectadas en el plan original, pero una vez implementado el mismo, cada provincia comenzó a reclamar por “su” propia universidad nacional. Por otra parte, los grupos sociales -especialmente los colegios profesionales- de cada localidad presionaron para acceder a cargos docentes y no docentes dentro de la institución, que muchas veces era el mayor empleador de la zona. La presión por acceder a los cargos docentes, asimismo, debilitó desde el principio la idea de descartar las carreras profesionales tradicionales (Cano, 1985, pág. 16). Por otra parte, los profesionales con cierto prestigio político local y la población presionaban para obtener Facultades con carreras que permitieran a sus hijos obtener títulos de carreras tradicionales, tales como

⁷ Sucesor de Pérez Guilhou, José Luis Cantini asumió como Secretario de Educación durante el interregno de Levingston.

abogacía, medicina, arquitectura e ingeniería. Esta situación distaba mucho de las ideas desarrollistas que habían propulsado la idea de crear nuevas universidades nacionales, pero da cuenta de la improvisación, el oportunismo o las prácticas clientelares presentes durante el proceso (Pérez Lindo, 1985, pág. 160). Así también lo confirman las renuncias en la cartera de educación de José Luis Cantini y Emilio Mignone. De acuerdo al testimonio de éste último, ambos simpatizaban con el movimiento que llevaría a la ampliación del sistema de educación superior, pero creían conveniente actuar con prudencia, garantizando en cada caso la necesidad y la viabilidad de los establecimientos que se proyectaban (Mignone E. , 1992, pág. 28). Lanusse omitió lo sostenido por los encargados de esta secretaría y, consecuentemente, ambos funcionarios presentaron sus renuncias.

¿Qué hizo posible, entonces, que pese al fuerte rechazo por parte de la cartera de educación, el presidente tomara una medida de semejante envergadura?

La coyuntura política estaba transitando hacia una apertura democrática y Lanusse había comenzado su gestión abriendo el diálogo con los dirigentes políticos del interior, los gremios, y demás sectores de la población argentina. En este sentido, y tal como lo expresa Pérez Lindo (1985, pág. 156), “la posibilidad de crear nuevas universidades en las provincias y de aprovechar con favores para hacerse una clientela política no se le escapaba a los dirigentes políticos”. Asimismo, en muchas ciudades del interior, fueron las organizaciones civiles y los estudiantes secundarios los que presionaron para la conformación de nuevas universidades que les permitieran seguir sus estudios en el lugar de residencia. En sintonía con ello, resulta interesante la exposición de Rovelli(2008, pág. 81) quien da cuenta de la importancia que se le comienza a otorgar a la juventud desde el gobierno. En este sentido, pone de relieve el discurso del 1º de mayo en la ciudad de Río Cuarto, en donde se convoca especialmente a «la juventud argentina» para formar parte del proceso de apertura política a través de la consolidación de «partidos modernos y verdaderamente representativos». Con ello, afirma, el presidente proponía reencuzar a la lucha estudiantil a la democracia electoral y, como contrapartida, ofrecía una nueva universidad en dicha ciudad y la apertura de dos más en el año próximo.

Unos meses después, el Ministro de Educación Gustavo Malek volvía a dirigirse a la juventud. En este caso a los jóvenes neuquinos y rionegrinos, quienes serían los próximos beneficiarios de la Universidad Nacional del Comahue. En aquella oportunidad expresó su preocupación por la crisis de esta institución y pidió que se comprendiera “que ni la universidad es un campo de batalla ni sirve para destruir” y afirmó que “la juventud no está destinada a odiar”, por lo que aspiraba a que la nacionalización cumpliera con su tarea

histórica con estudiantes que “no quemarán laboratorios ni tirarán bombas” y que, por el contrario, “harán honor a la región” (La Nación, 07/08/71, pág. 20). En octubre del mismo año, se dirigió nuevamente a la juventud, por medio de un discurso brindado en la ceremonia de colación de grados de la universidad sanjuanina. Allí reforzó lo expuesto por Lanusse en Río Cuarto y afirmó que “la verdadera juventud [ansiosa] de grandeza de su patria (...) sabe muy bien que ésta no puede alcanzarse sino con sacrificios, trabajo y estudios. Mucho más que sus desbordes de violencia vacua, explicable también”. Asimismo, afirmó que consideraba que la “juventud no puede ni debe eludir el deber de apelar a medios idóneos y lícitos de expresión para elevar su voz” y en consecuencia, puntualizó que “los mayores [tenían] la obligación de escuchar sus palabras y reflexionar en consecuencia”. Finalmente señaló que “la disensión y la crítica” son “convenientes” pero sólo ocasionalmente y de forma medida, porque “cuando la división interna ataca todas las estructuras de la sociedad, esta se convierte en eficaz instrumento de aniquilación o de esterilidad” (La Nación, 01/10/71, pág. 16).

A partir de lo expuesto es posible considerar que los discursos gubernamentales estaban orientados a interpelar a la juventud “violenta”, pero sobre todo, a la juventud peronista. Esto, cobra especial relevancia si lo vinculamos con los pedidos que había estado realizando Lanusse a Perón, para garantizarle así la posibilidad de abrir los canales democráticos y llamar finalmente a elecciones. Tal como pudimos observar anteriormente, la base social del peronismo se había ampliado notablemente en el último tiempo, a la vez que había crecido manifiestamente el descontento social por el proceso “revolucionario” del gobierno de facto. De cara a las elecciones de septiembre, Lanusse debía fortalecer su figura que estaba fuertemente dañada en la escena civil y militar. ¿Qué mejor, entonces, que aprovechar a una multitudinaria población ansiosa por tener una universidad nacional en su localidad? Con ello lograría, por una parte, cumplir con las promesas vagas de Onganía, a la vez que intentaría atenuar la imagen negativa del gobierno militar por medio de políticas que satisficieran demandas sociales surgidas durante la primera etapa de la autodenominada “Revolución Argentina”. Y por la otra, podría captar la simpatía de poblaciones enteras, y posicionarse mejor de cara a la apertura política.

La materialización de una propuesta de semejante envergadura, entonces, puede vincularse con el diálogo que el nuevo Jefe de Estado abrió hacia la población con el fin de atender las necesidades del “hombre común”, Ministro de Desarrollo Social mediante. La proliferación de universidades provinciales y nacionales que se crearon entre 1971 y 1973, sin estar previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, refuerza esta idea. La

nacionalización de las Universidad Provincial de Neuquén en este período es un ejemplo de ello, ya que sin estar incluida en el plan original resolvió un conflicto de larga data con la población de dicha localidad. Creada en 1964, la Universidad Provincial de Neuquén fue concebida bajo la idea de descentralización y regionalización, en vistas de absorber estudiantes de toda la provincia, junto con alumnos de Río Negro y La Pampa. Para el año 1970, la universidad provincial contaba con un total de mil alumnos, de los cuales un 45% correspondía a Neuquén, el 40% a Río Negro, un 10% al sur de Buenos Aires y La Pampa y el 5% al resto del país. Sin embargo, para principios de la década, esta situación generaba grandes problemas presupuestarios, ya que más de la mitad de sus estudiantes provenían de otras provincias y era el gobierno neuquino quien debía afrontar los gastos. De este modo, comenzaron a surgir reclamos de los estudiantes, quienes al grito de “¡acción, acción, nacionalización!”, pedían que la situación se resolviera (Quintar, Gentile, Debattista, & Bertello, 1998, pág. 38). En el mismo período se nacionalizaron las universidades de La Pampa, San Juan y Mar del Plata y se crearon nuevas universidades nacionales en La Rioja, Catamarca, Jujuy, San Luis, Entre Ríos, Misiones, La Pampa, Salta y Santiago del Estero.

A modo de cierre

Tal como pudimos observar, para muchos autores se trató de una política cuyo objetivo implícito era descongestionar las casas de estudio y así segregar y descentralizar al movimiento estudiantil. Pero en tal caso, ¿por qué no se adoptó inmediatamente? La propuesta había surgido en octubre de 1968 y en mayo del año siguiente la Argentina atravesó una serie de agitaciones sociales que culminaron con el *Cordobazo*. Sin embargo, y a pesar de que Onganía manifestó que los agitadores habían sido los estudiantes, no hizo más que reforzar las leyes y aumentar las penas para aquellos que alteraran el orden público o realizaran acciones subversivas. Tanto eso como la negativa constante de su Secretario de Educación a la idea de crear nuevas universidades constituían indicios de que la propuesta de Taquini no se adoptaría como una política de Estado. Sería recién en Río Cuarto, ante una multitud que le solicitaba la creación de una universidad en dicha localidad, que Onganía afirmaría que iba a evaluar dicha posibilidad. Cabe destacar, sin embargo, que quien le insistió para que la respuesta fuera positiva fue el propio Lanusse, quien se desempeñaba aún como Comandante en Jefe del Ejército.

La posibilidad de que la medida haya sido deliberadamente política con la intención de disgregar al movimiento estudiantil podría haber cobrado más fuerza si la misma se hubiera llevado a cabo bajo el gobierno de Levingston. Tal como observamos, fue él quien manifestó

que la propuesta de la Universidad en Río Cuarto le interesaba especialmente frente a los disturbios que se estaban desarrollando en Córdoba con los obreros y los estudiantes. Sin embargo, esta hipótesis sigue siendo débil ya que bajo su breve período presidencial sólo logró incluir la propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que no garantizaba el cumplimiento de la misma. La intención, en esta oportunidad, era clara, pero los cambios en la cúpula gubernamental no permitieron que la misma se desarrollara de acuerdo a lo manifestado por Levingston.

Fue bajo la presidencia de Lanusse, finalmente, que la creación de nuevas universidades se materializó de acuerdo a lo proyectado en el Plan Nacional para el quinquenio 1971-1975. La motivación, sin embargo, parece no relacionarse con una medida meramente orientada a despolitizar al estudiantado. Por el contrario, encontramos en los discursos de Lanusse y su nuevo Ministro de Educación una clara intención por interpelar a la juventud, principalmente la universitaria, a quienes se les hacía un especial llamado a participar en los canales legales de la política. Esta situación, en el marco de la coyuntura política de cara a las elecciones de septiembre de 1973, nos sugiere que la creación de nuevas universidades nacionales se realizó como parte de una política destinada más bien a aumentar la base social del gobierno para poder competir con el peronismo, cuyo peso político había crecido notoriamente pese al exilio de su máximo representante.

La radicalización política de la juventud en esos años era un problema claro para el gobierno de facto. Pero las medidas que adoptaron para hacerle frente estuvieron orientadas a fortalecer el sistema represivo. Tal como mencionamos, en 1971 Lanusse aumentó las penas por delitos comunes, creó la Cámara Federal en lo Penal que tenía competencia para juzgar delitos de “naturaleza subversiva” y dictó una ley que facultaba al Poder Ejecutivo a emplear a las Fuerzas Armadas para “prevenir” y combatir a la subversión durante la vigencia del Estado de Sitio. A su vez, uno de los pedidos más contundentes que le hizo a Perón fue la desaprobación de las organizaciones armadas con el fin de desacreditarlas y orientarlas hacia nuevas formas de expresión. La juventud era una pieza clave en la nueva coyuntura política, y tanto Lanusse como Perón lo sabían. Frente a la negativa de este último a deslegitimar a las organizaciones armadas, Lanusse debía encontrar una forma de orientarlas de modo tal que se acomodaran en el nuevo escenario social y político.

En este contexto, y bajo la bandera de las ideas desarrollistas, se crearon universidades nacionales en el interior del país orientadas a formar profesionales que pudieran insertarse en las estructuras productivas de la zona y explotar los llamados polos de desarrollo. O esa era al menos, la propuesta inicial. Sin embargo, de las 5 proyectadas en el Plan Nacional de

Desarrollo y Seguridad, acabaron por crearse 13 en total. Con ello, ya no se crearían universidades regionales, en el sentido amplio del término, sino universidades nacionales en cada una de las provincias de la Argentina. Asimismo, al poco tiempo de iniciar sus actividades, muchas de las universidades comenzaron a orientar el perfil de sus egresados hacia carreras profesionalistas y tradicionales, con lo cual se desvanecía lentamente la propuesta de una universidad moderna. Tampoco, la estructura de campus se realizó en todos los casos, y muchas nuevas casas de estudio se erigieron sobre la base de institutos ya existentes. Fue el propio Taquini quien cuestionó la deformación de la idea original, y advirtió sobre las consecuencias de crear instituciones por doquier.

Tal como señalamos, si bien podemos encontrar similitudes entre el plan de Taquini y la política expuesta en el Plan Nacional, éste último no se limitó al primero, e incluso presentó otras propuestas. De este modo, podemos concluir que el denominado “plan Taquini” logró motorizar a las denominadas “fuerzas vivas”, pero la política universitaria que finalmente se implementó se conformó, en primer lugar, en base a todas las discusiones, diagnósticos y propuestas que se dieron a conocer durante la década del sesenta. Y en segundo lugar, en el marco de una coyuntura política bastante particular, en donde el gobierno militar buscaba una salida lo suficientemente decorosa, como para mantener abierta la posibilidad de que el nuevo Jefe de Estado se legitimara por vía democrática, para lo cual debía enfrentar al peronismo en elecciones.

Bibliografía

- Brennan, J., & Gordillo, M. (2008). Córdoba Rebelde. La Plata: De la campana.
- Buchbinder, P. (2005). Historia de las universidades argentinas. Bs. As.: Sudamericana.
- Cano, D. (1985). La educación superior en la Argentina. Bs. As.: GEL
- De Amézola, G. (2000). Levingston y Lanusse o el arte de lo imposible (Vol. 2). La Plata: Ediciones al Márgen.
- De Riz, L. (2000). La Política en Suspense: 1966- 1976. Bs. As.: Paidós.
- Mendonça, M. (Febrero de 2014). Tesis de Maestría. Buenos Aires, Argentina.
- Mignone, E. (1992). Universidad Nacional de Luján. Origen y evolución. Luján: UNLU.
- Novaro, M. (2010). Historia de la Argentina. Buenos Aires: Siglo XX.
- Onganía, T. G. (11 de Octubre de 1969). Cena de Camaradería. Buenos Aires, Argentina.
- Pérez Lindo, A. (1985). Universidad, política y sociedad. Buenos Aires: EUDEBA.
- Potash, R. (1994). El ejército y la política en la Argentina 1962-1973. Bs. As.: Sudamericana.

- Pozzi, P., & Schneider, A. (2000). En C. Hernán, P. Pablo, & A. Schneider, De la Revolución Libertadora al Menemismo. Bs. As.: Imago Mundi.
- Quintar, J., Gentile, M. B., Debattista, S., & Bertello, C. (1998). La Universidad Nacional del Comahue en los años 70: de la rebelión creativa a la reacción autoritaria. Neuquén: Educo.
- Romero, L. A. (2012). Breve historia contemporánea de la Argentina 1916-2010. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Rouquié, A. (1983). Poder militar y sociedad política en la Argentina II 1943-1973. Bs. As.: Emecé.
- Rovelli, L. I. (septiembre de 2008). La mediación de ideas, saberes expertos y estructuras institucionales en la creación de universidades nacionales en los años 70. Buenos Aires, Argentina: Flacso.
- Tortti, M. C. (2000). Protesta social y "nueva izquierda" en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional. En H. Camarero, P. Pozzi, & A. Schneider, De la Revolución Libertadora al Menemismo. CABA: Imago Mundi.